

Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ordenó dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte denunciada contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Copiapó, que rechazó el de nulidad que interpuso con la finalidad de invalidar la de base que acogió la denuncia por prácticas antisindicales.

Segundo: Que el recurso de unificación de jurisprudencia, es susceptible de ser deducido contra la resolución que falle el de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que *“respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”*, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo. Asimismo, de su artículo 483-A, se desprende que esta Corte debe controlar en la admisibilidad, su oportunidad, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del arbitrio en referencia.

Tercero: Que, conforme se indica en el recurso, la materia de derecho que se propone uniformar consiste en determinar *“si un trabajador que no es profesional de la educación y que no tiene autorización administrativa para ejercer la docencia, puede o no ser considerada una persona “habilitada para ejercer la función docente según las normas legales vigentes”, a que se refiere el artículo 46 letra g) inciso segundo de la Ley N° 20.370”*.

Cuarto: Que, con relación al tema jurídico planteado para ser uniformado, se ofreció a modo de contraste, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Copiapó, en los autos Rol N° 65-2021, en que se estableció que no hay vulneración de derechos fundamentales al no efectuarse el pago por ajuste remuneracional por renta básica mínima nacional, que corresponde a trabajadores calificados como profesionales de la educación según el Estatuto Docente, porque el denunciante no contaba con autorización para la realización de labores docentes a contar del mes de marzo de 2020, en virtud de Resolución Exenta N° 000455 que dispuso que su autorización duraba hasta el mes de febrero de 2020.



Quinto: Que, como se señaló, para la procedencia del recurso en análisis, es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que, frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se arribe a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia que deba ser uniformada. Así, la labor que corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma que regla la controversia al ser enfrentada con una situación equivalente resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el impugnado y los traídos como criterios de referencia.

Sexto: Que a la luz de lo expuesto y realizado el examen descrito, tal exigencia no aparece observada aquí, desde que la situación resuelta en esta causa no es equiparable con la que sustenta el fallo de contraste, puesto que, como se advierte de su sola lectura, la decisión que ahora se impugna, estableció que el trabajador, dirigente sindical, cumplía labores docentes para la denunciada en el ámbito vocacional vinculado al mundo del trabajo, de acuerdo a la letra a) N° 1 del artículo 6° del Decreto N° 352, del año 2004, del Ministerio de Educación, para las cuales no necesita la autorización docente que prevé en artículo 46 letra g) inciso segundo de la Ley N° 20.370, por lo que al modificar sus funciones con una merma económica, se afectó la libertad sindical. Sin embargo, el pronunciamiento contenido en la sentencia que fue acompañada se sustenta en razonamientos distintos, que dicen relación con la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales por el no pago de bonos asociados al trabajo docente, en virtud de la falta de autorización para la realización de tales labores por parte del denunciante.

Séptimo: Que, por lo anteriormente expuesto, debe ser decretada la inadmisibilidad del recurso interpuesto por el demandado, puesto que la necesidad de uniformidad de la materia y la disparidad de decisiones respecto de la misma, que la ley exige y que se proponen como argumento para sostenerlo, no se advierte concurrente, teniendo además presente, el carácter excepcional y especial de este arbitrio, reconocido expresamente por el artículo 483 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia once de mayo de dos mil veintidós.



Regístrese y devuélvase.
Nº 20.796-2022.-



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Andrea Maria Muñoz S., Maria Gajardo H., Diego Gonzalo Simpertigue L., Ministro Suplente Raúl Eduardo Mera M. y Abogado Integrante Gonzalo Enrique Ruz L. Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veintidós.

En Santiago, a dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

